Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; del once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS** los expedientes electrónicos formados con motivo de los recursos de revisión números **01183/INFOEM/IP/RR/2024 y 01233/INFOEM/IP/RR/2024 acumulados**, promovidos por **XXXXXXXX,** en lo sucesivo **LA** **RECURRENTE,** en contra de la respuesta del **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México**, en lo sucesivo el **SUJETO OBLIGADO,** se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

## **ANTECEDENTES**

1. El ocho de febrero de dos mil veinticuatro, sepresentaronvía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** las solicitudes de información pública registradas con el número **00061/TRIJAEM/IP/2024 y 00056/TRIJAEM/IP/2024,** mediante las cuales se requirió lo siguiente:

|  |
| --- |
| **00061/TRIJAEM/IP/2024** |
| *“Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 fracción XXIV de la Ley Orgánica de ese Tribunal de Justicia Administrativa, requiero el número de asuntos atendidos, su materia, la duración de los procesos, el rezago y las resoluciones confirmadas, modificadas o revocadas, todo de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, del 1 de enero de 2022 y hasta la fecha de la presente solicitud. No omito manifestar que, en términos de lo prescrito en la fracción III del artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por tratarse de información que por disposición legal debe poseerse, solicito se genere la misma y me sea proporcionada en caso de inexistencia.” (Sic)* |
| **00056/TRIJAEM/IP/2024** |
| *“Copia del Libro de Gobierno de Juicios Administrativos, de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, únicamente las páginas anotadas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 8 de enero de 2024.” (Sic)* |

1. Se señaló como modalidad de entrega de la información: a través del **SAIMEX.**
2. El veintiséis y veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, el **SUJETO OBLIGADO** emitió respuesta a las solicitudes de información **00061/TRIJAEM/IP/2024 y 00056/TRIJAEM/IP/2024**, en los siguientes términos:

|  |
| --- |
| **00061/TRIJAEM/IP/2024** |
| *“…se atiende solicitud…” (Sic)*  Se adjuntaron los siguientes archivos electrónicos:  [**RESPUESTA A SOLICITUD 00061-TRIJAEM-IP-2024.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2023555.page): Oficio suscrito por la Servidora Pública Habilitada como Secretaria General del Pleno y Secretaria Técnica de la Juta de Gobierno y Administración, por medio del cual, refirió que la solicitud de información versa sobre datos específicos que son competencia de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, por lo tanto se encuentra imposibilitada materialmente para poder rendir la información, debido a que no obra en sus archivos lo solicitado.  [**RESPUESTA SOLICITUD 00061 (OFICIO).pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2024954.page): Oficio suscrito por el Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, por medio del cual, informó que no cuentan con procesos automatizados que permitan hacer una búsqueda de asuntos atendidos, su materia, la duración de los procesos, el rezago y las resoluciones confirmadas, modificadas o revocadas de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, del 1 de enero de 2022 a la fecha de la solicitud; no obstante, remitió el link: <https://trijaem.gob.mx/sentencias/>, donde refirió que el Solicitante encontraría la información del 01 de enero del 2022 al fecha en que se atiende la solicitud.  [**ACUERDO DE RESPUESTA SOLicitud 61..pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2027106.page): Oficio suscrito por la Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por medio del cual, manifestó la respuesta emitida por el Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y la Servidora Pública Habilitada como Secretaria General del Pleno y Secretaria Técnica de la Juta de Gobierno y Administración. |
| **00056/TRIJAEM/IP/2024** |
| *“…Se proporciona respuesta mediante archivos adjuntos…”*  Se adjuntaron los siguientes archivos electrónicos:  [**RESPUESTA SOLICITUD 00056 (OFICIO) 1.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2031722.page)**:** Oficio suscrito por el Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por medio del cual, refirió que el Libro de Gobierno de Juicios Administrativos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria contiene información referente a asuntos de diversas índoles, por lo cual, la persona solicitante y las partes podrán consultar los expedientes en que se documenta el procedimiento y proceso administrativo y obtener copia certificada de los documentos y actuaciones que los integren, previo a la acreditación de su personalidad jurídica.  [**ACUERDO DE RESPUESTA SOLICITUD 00056.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2031893.page)**:** Oficio suscrito por la Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por medio del cual, manifestó la respuesta emitida por el Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. |

1. El cuatro y cinco de marzo de dos mil veinticuatro, se interpuso el recurso de revisión **01183/INFOEM/IP/RR/2024 y 01233/INFOEM/IP/RR/2024** respectivamente, en los siguientes términos:

|  |
| --- |
| **01183/INFOEM/IP/RR/2024** |
| **Acto Impugnado: *“****La respuesta a la solicitud” (Sic)*  **Razones o Motivos de Inconformidad: *“****No proporcionan la información alegando que, no se cuenta con un sistema que permita obtener información especifica de la Primera Sala Regional, no tienen la obligación de llevar a cabo el procesamiento de datos para atender la solicitud; sin embargo, el sujeto obligado omite considerar que, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIV del artículo 17 de su Ley Orgánica, SI TIENE LA OBLIGACIÓN DE "Integrar y desarrollar los subsistemas de información estadística sobre el desempeño del Tribunal, del Pleno de la Sala Superior, así como de las Magistraturas Supernumerarias, SALA REGIONAL DE JUSRISDICCIÓN ORDINARIA, Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal y Secciones, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas". Por lo tanto y contrario a lo que se afirma, es deber del sujeto obligado, contar con un sistema de información que contenga los datos que requiero, por cuanto hace a la Primera Sala Regional de Jusrisdicción Ordinaria. Además de que el sujeto obligado realiza una inexacta interpretación del contenido del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece que “la obligación de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones”; en virtud de que el procedimiento de búsqueda que prevén los artículos 17, 18, 19, 162 y 170 de la Ley de la materia, no tiene el carácter de procesamiento de la información, ni se vincula con la práctica de investigaciones. Lo anterior se confirma con el Criterio de Interpretación 02/19, Segunda Época, aprobado por ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, de rubro “BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. SU EJERCICIO PARA LOCALIZAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, NO CONSTITUYE UNA INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE REFIERE EL ARTÍCULO 12* *DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS”. Finalmente y para el caso de no disponer de la información requerida, se debió emitir la declaración de inexistencia correspondiente, así como la resolución del Comité de Transparencia que confirmara la misma, cumpliento los lineamientos contenidos en el artículo 169 de la Ley de Transparencia, que en su fracción II preve la facultad de ese Cuerpo Colegiado para ordenar* se genere la información correspondiente al trararse de una facultad legal.*” (Sic)* |
| **01233/INFOEM/IP/RR/2024** |
| **Acto Impugnado: *“****La respuesta a la solicitud” (Sic)*  **Razones o Motivos de Inconformidad:** *“Transgrede en perjuicio de la suscrita el Derecho Humano de Acceso a la Información, determinado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4 de la Carta Democrática Interamericana; así como IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En este sentido y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una multitud de jurisprudencia, el Derecho Humano de Acceso a la Información, se constituye como un derecho humano fundamental, que por un lado asegura a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. En efecto, el derecho de acceso a la información se trata de libertades que tienen tanto una dimensión individual como una dimensión social, que exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de la sociedad a conocer y juzgar la gestión gubernamental, así como el desempeño de los servidores públicos. Así, el Derecho Humano de Acceso a la Información se convierte en una herramienta clave, aunque no la única, para incentivar la transparencia en la actividad del Estado y fomentar la rendición de cuentas. Este derecho nace del sistema republicano de gobierno y su ejercicio constituye un instrumento esencial en el fortalecimiento de las instituciones, toda vez que contar con la información adecuada y oportuna conforma un elemento clave para fiscalizar a las autoridades en las que se ha depositado la confianza para gobernar en nombre del pueblo. Bajo tales parámetros, resulta inconcuso de que la función jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, va más allá del tradicional rol de tercero imparcial en la resolución de conflictos, dado que influye en algunos casos en los proceso de formulación de políticas públicas; de ahí que su actividad no debe ser realizada de manera aislada del contexto social en los que sus operadores actúan y sin mecanismos efectivos para la publicidad tanto de su funcionamiento administrativo como de su labor jurisdiccional al no estar exentos de los controles que afectan al resto de las instituciones estatales. Por tanto, en términos de lo dispuesto en los numerales 4, 7, 11, 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda y cada una de la información que produce o posea el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el ejercicio de sus atribuciones, puede ser requerida por cualquier persona en el marco del derecho que cada uno tiene de acceder libremente a la información pública y de controlar el ejercicio de los poderes públicos en el desempeño de sus funciones, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR INTERÉS ALGUNO O JUSTIFICAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA; de ahí que los expedientes que genera dicho Órgano Jurisdiccional constituye información pública accesible a cualquier persona. Sirve para robustecer el anterior aserto, la Jurisprudencia 2a.LXXXVIII/2010, adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 463, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: “INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de* *actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.” Es importante aclarar, que el principio de independencia judicial prescrito en el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional, no debe ser entendido como un valor que en sí mismo impida un adecuado control del desempeño de los órganos solucionadores de conflictos ni la inexistencia del deber de rendir cuentas de la labor que ellos realizan; por el contrario, la noción de independencia debe ser concebida como la precondición para la imparcialidad del comportamiento judicial y para garantizar un mejor servicio al público. Dicha independencia conlleva la responsabilidad que exige la adopción de mecanismo de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que la justicia responda por sus decisiones y/o por el uso real e intencionado de los recursos que le fueron asignados. Concurre con el anterior criterio aunque por analogía, la Tesis de Jurisprudencia IV.1o.C.31 K, sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 1017, que a la letra dice: “ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TRATÁNDOSE DE EXPEDIENTES JUDICIALES. SUS ALCANCES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Mediante decreto ciento ocho, publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de julio de dos mil cuatro, se reformó el artículo 39 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue: "Artículo 39. Las copias o testimonios de documentos que existan en los archivos o expedientes se permitirán a toda persona que los solicite, quedando razón y constancia de recibo en el que se señalen los que hubieren sido expedidos. Lo anterior con excepción de los casos en que la Ley de Acceso a la Información Pública obligue a la autoridad a negar el acceso público a la información, en los cuales sólo las partes legitimadas o quienes ellas autoricen podrán consultar y obtener copias de los expedientes.-El Juez o Magistrado dictará las medidas que sean conducentes, para tal efecto.". La exposición de motivos y el proceso legislativo de ese decreto reformatorio ilustran con claridad sobre las razones consideradas por el legislador local para dar una extraordinaria amplitud al derecho de los gobernados para acceder a la información contenida en los expedientes judiciales, esto es, la idea de poner a disposición de cualquier persona todos los documentos contenidos en los procedimientos judiciales, sin más límites que los previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Nuevo León, eliminando con ello la restricción de que esa consulta sea exclusivamente de las partes; luego, para delimitar los alcances del precepto reproducido, es necesario acudir a este último ordenamiento. Así, los artículos 4, 10, fracción VII, 11, 11 bis, 13 y 15 de la citada ley, dimensionan el derecho de acceder a la información pública del Estado y asignan esa calidad a las acciones, diligencias y etapas procesales contenidas en los expedientes cuyo conocimiento corresponde a los tribunales y juzgados del Poder Judicial del Estado, esto es, la intención del legislador fue publicitar todos los negocios judiciales, tanto en trámite como resueltos, salvo que se trate de asuntos de naturaleza familiar, procesos penales por delitos sexuales, contra la libertad o contra la familia y aquellos en los cuales la víctima sea menor de edad o incapaz; fuera de esos casos, toda información contenida en los expedientes judiciales puede y debe ser entregada a cualquier persona que lo solicite, sin necesidad de justificar el motivo de la petición ni el uso que se le dará; por tanto, de no actualizarse alguna de las restricciones previstas en la ley, no hay justificación para negar la información.” No omito mencionar que, la suscrita NO SOLICITO LAS CONSTANCIAS DE LOS EXPEDIENTES QUE TRAMITAN (pero dada la respuesta del sujeto obligado, considero la posibilidad de hacerlo respecto de todos los ejercicios 2021, 2022 y 2023), sino que únicamente solicite copias del Libro de Gobierno, las cuales debieron haberse entregado a la dicente, lo que pudo hacerse en versión pública, para el caso de contener información clasificada.” (Sic)* |

1. Se registraron los recursos de revisión bajo los números de expediente **01183/INFOEM/IP/RR/2024 y 01233/INFOEM/IP/RR/2024**; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turnaron a los **Comisionadas María del Rosario Mejía Ayala**, con el objeto de su análisis.
2. Posteriormente, en la **Cuadragésima Sesión Ordinaria,** celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, el Pleno de este Órgano Autónomo ordenó la acumulación del recurso de revisión **01233/INFOEM/IP/RR/2024** al diverso **01183/INFOEM/IP/RR/2024**, a efecto de que está Órgano Garante formulará y presentará el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con el numeral ONCE, incisos b) y c), de los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública.
3. Se registraron los recursos de revisión bajo el número de expediente al rubro indicado, asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turnaron a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala** con el objeto de su análisis.
4. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión del seis y once de marzo de dos mil veinticuatro, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **SAIMEX,** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentará el Informe Justificado procedente.
5. El diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, el **SUJETO OBLIGADO** rindió los informes justificados correspondientes, por medio de los siguientes archivos electrónicos:

|  |
| --- |
| **01183/INFOEM/IP/RR/2024** |
| [**\_INFORME\_JUSTIFICADO\_RR\_ 01883\_ SOL \_00061\_2024..pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2058745.page)**:** Oficio suscrito por la Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por medio del cual, informó las respuestas emitidas por el Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y la Servidora Pública Habilitada como Secretaria General del Pleno y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y Administración.  [**OFICIO 726 1RA SALA REGIONAL.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2058746.page)**:** Oficio suscrito por el Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por medio del cual, **ratificó la respuesta.**  [**OFICIO NO. 045 JUNTA MANIFESTACIONES.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2058747.page)**:** Oficio Suscrito por la Servidora Pública Habilitada como Secretaria General del Pleno y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y Administración, por medio del cual, informó el número de asuntos atendidos, de los registros que arroja el sistema SIREPROC, del 1 enero 2022 a la fecha de la solicitud, de la Sala referida. Ahora bien, respecto a la información consistente en las resoluciones confirmadas, modificadas o revocadas, del 1 enero 2022 a la fecha de la solicitud, de la Sala referida, reiteró que pueden ser consultadas en el sistema PORTAL DE SENTENCIAS, a través del enlace <https://trijaem.gob.mx/sentencias/>. Finalmente, con relación a la duración de los procesos y el rezago, señaló que los sistemas que actualmente tiene el sujeto obligado no permiten localizar la información al grado de detalle requerido. |
| **01233/INFOEM/IP/RR/2024** |
| [**MANIFESTACIONES RR 01233 SOL 56.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2048077.page)**:** Oficio suscrito por la Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por medio del cual, **ratificó la respuesta.**  [**Recurso (Informe 1233) 1.3 (1).pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2048078.page)**:** Oficio suscrito por el Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por medio del cual, **ratificó la respuesta.** |

1. Por su parte, el **RECURRENTE** no presentó pruebas o alegatos que a su derecho convinieran.
2. El veintinueve de abril y doce de agosto de dos mil veinticuatro, se notificó el acuerdo mediante el cual se amplió el plazo para emitir resolución por un término de 15 días adicionales.
3. Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
4. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
5. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
6. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
7. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

1. Por ello, este Organismo Garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.
2. La Comisionada Ponente decretó el cierre de instrucción mediante acuerdo del once de diciembre de dos mil veinticuatro; por lo que se ordenó turnar el expediente a resolución, misma que ahora se pronuncia; y ---------------------------------------------------------------------------

## **CONSIDERANDO**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 10, 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del **SAIMEX** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; siendo así que el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del cuatro de marzo al uno de abril de dos mil veinticuatro, en consecuencia, si la parte **RECURRENTE** presentó su inconformidad el cuatro y cinco de marzo de dos mil veinticuatro respectivamente, se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Consecuencia, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

## **TERCERO. Del planteamiento de la *Litis.***

1. El **RECURRENTE** requirió lo siguiente:

* **Número de asuntos atendidos, su materia, la duración de los procesos, el rezago y las resoluciones confirmadas, modificadas o revocadas de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, del 1 de enero de 2022 al 8 de febrero de 2024; y**
* **Copia del Libro de Gobierno de Juicios Administrativos, de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, únicamente las páginas anotadas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 8 de enero de 2024.**

1. El **SUJETO OBLIGADO** emitió respuesta por medio de los archivos electrónicos descritos en el párrafo 3 de la presente resolución.
2. Posteriormente, el **RECURRENTE** interpuso losrecursos de revisión número **01183/INFOEM/IP/RR/2024 y 01233/INFOEM/IP/RR/2024** respectivamente, donde manifestó como motivos de inconformidad, **la negativa de la información, respectivamente.**
3. En dichas condiciones, la *Litis* a resolver en el presente recurso de revisión se circunscribe a determinar si se actualizan la causal de procedencia prevista en el artículo 179, fracción **I** de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**.

## **CUARTO. Del estudio y resolución del asunto.**

1. El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México.
2. Definiendo el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de* oportunidades *para recibir, buscar e impartir información[[1]](#footnote-1)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[2]](#footnote-2)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[3]](#footnote-3)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[4]](#footnote-4)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
3. En México, además de los derechos, están reconocidas las garantías para su protección, en ese sentido el párrafo tercero de artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

### **“Artículo 1.-**

*(…)*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*(…)*”

1. Por lo anterior, se deduce que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Humano de Fuente Internacional y Constitucionalmente reconocido. Además del derecho, también se reconocen garantías para su protección, lo que vincula con el mandato del párrafo tercero del mismo artículo.
2. Así conforme a la Constitución Política de las Estado Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México respectivamente, el cumplimiento de las garantías primarias, entendidas como obligaciones inmediatamente relacionadas con el Derecho de Acceso a la Información Pública, permiten que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones lo respeten, protejan y garanticen.

#### **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

### **“Artículo 6. …**

***…***

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

#### Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

##### “Artículo 5.-…

*…*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.***

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

### Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:

1. ***Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*
2. Según el artículo 150 de la Ley de Transparencia del Estado, la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares*, contemplando el derecho de las personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena.
3. El Derecho de Acceso a la Información se garantiza y respeta oportunamente, y según lo que dispone la Ley, las *solicitudes de acceso a la información*.
4. Así entonces, se procede analizar, en primer lugar, si el **SUJETO OBLIGADO** al atender la solicitud de acceso a la información, satisfizo la garantía primaria del derecho según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en segundo término si cumplió con su deber de respetar y garantizar el derecho, entregando la información solicitada.
   1. **De la información solicitada y la respuesta del SUJETO OBLIGADO.**
5. Derivado del Planteamiento de la Litis, se procede a analizar el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico y con ello, este Órgano Garante dicte la resolución correspondiente, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
6. Así, debemos recapitular lo relativo a la información requerida por el Particular y el pronunciamiento del **SUJETO OBLIGADO** mediante respuesta e informe justificado, en consecuencia, se inserta el siguiente cuadro descriptivo:

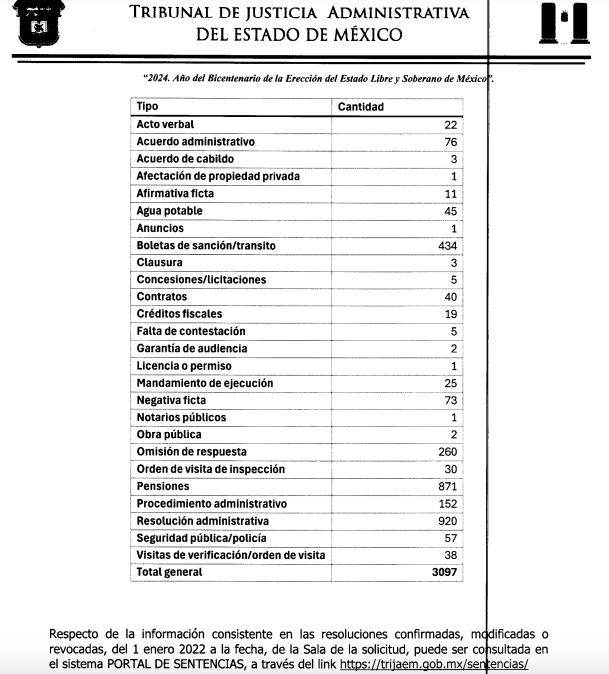
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Información Solicitada** | **Respuesta** | **Informe Justificado** |
| **1** | Número de asuntos atendidos, su materia, la duración de los procesos, el rezago y las resoluciones confirmadas, modificadas o revocadas de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, del 1 de enero de 2022 al 8 de febrero de 2024; y | El **Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa,** remitió el link: [**https://trijaem.gob.mx/sentencias/**](https://trijaem.gob.mx/sentencias/)**,** donde refirió que el Solicitante encontraría la información del 01 de enero del 2022 a la fecha en que se atiende la solicitud. | la Servidora Pública Habilitada como Secretaria General del Pleno y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y Administración, informó el número de asuntos atendidos, de los registros que arroja el sistema SIREPROC, del 1 enero 2022 a la fecha de la solicitud, de la Sala referida.  Ahora bien, respecto a la información consistente en las resoluciones confirmadas, modificadas o revocadas, del 1 enero 2022 a la fecha de la solicitud, de la Sala referida, reiteró que pueden ser consultadas en el sistema PORTAL DE SENTENCIAS, a través del enlace <https://trijaem.gob.mx/sentencias/>.  Finalmente, en relación con los procesos y el rezago, señaló que los sistemas que actualmente tiene el sujeto obligado no permiten localizar la información al grado de detalle requerido. |
| **2** | Copia del Libro de Gobierno de Juicios Administrativos, de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, únicamente las páginas anotadas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 8 de enero de 2024. | El **Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México**, refirió que el Libro de Gobierno de Juicios Administrativos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria contiene información referente a asuntos de diversas índoles, por lo cual, **la persona solicitante** y las partes **podrán consultar los expedientes en que se documenta el procedimiento y proceso administrativo** y obtener copia certificada de los documentos y actuaciones que los integren, **previo a la acreditación de su personalidad jurídica.** | El Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, **ratificó la respuesta.** |

1. Cabe resaltar que, derivado de la respuesta, el **RECURRENTE** interpuso losrecursos de revisión número **01183/INFOEM/IP/RR/2024 y 01233/INFOEM/IP/RR/2024** respectivamente, donde manifestó como motivos de inconformidad, **la negativa de la información, respectivamente.**

* **Punto 1 del cuadro descriptivo.**

1. De lo expuesto en el punto 1 del cuadro descriptivo, correspondiente a lo requerido mediante la solicitud de información **00061/TRIJAEM/IP/2024**, se reitera que el **SUJETO OBLIGADO**, por medio del informe justificado proporcionó el número de asuntos atendidos de la Sala referida en la solicitud de información, de los registros que arroja el sistema SIREPROC, del 1 enero 2022 al 8 de febrero de 2024. Como se observa:

**(…)**



**(…)**

1. No obstante, respecto a la información relativa a las resoluciones confirmadas, modificadas o revocadas por la Sala referida en la solicitud, del 1 enero 2022 al 8 de febrero de 2024, ratificó la respuesta y señaló que pueden ser consultadas en el sistema PORTAL DE SENTENCIAS, a través del enlace <https://trijaem.gob.mx/sentencias/>.
2. En atención a lo anterior, se obvia el análisis de la competencia por parte del **SUJETO OBLIGADO**, para generar, administrar o poseer la información solicitada, dado que éste ha asumido la misma razón por la cual, al haberse pronunciado es que acepta poseer y administrar dicha información, en ejercicio de sus funciones de derecho público, motivo por el cual se actualiza el supuesto jurídico, previsto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
3. Por lo que, el estudio de la naturaleza jurídica de la información pública solicitada tiene por objeto determinar si ésta la genera, posee o administra el **SUJETO OBLIGADO**; sin embargo, en aquellos casos en que éste la asume, implica que cuenta con la misma; por consiguiente, a nada práctico nos conduciría su estudio, ya que se insiste la información pública solicitada, fue asumida por el **SUJETO OBLIGADO**.
4. Ahora bien, este Organismo Garante consultó la liga electrónica proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO**, de la cual, se desprende lo siguiente:



1. Así, se puede observar que el enlace permite acceder al Portal de Sentencias TRIJAEM, donde de manera enunciativa más no limitativa, podría obrar lo requerido, no obstante este **no da acceso directo a los documentos** solicitados por el **RECURRENTE**, asimismo, no se advierte que, por medio de la respuesta e informe justificado se proporcionarán indicaciones precisas para acceder a la información.
2. En este sentido, resulta conveniente señalar lo establecido en el artículo 161 de la citada Ley de Transparencia Local, mismo que se transcribe a continuación:

***Artículo 161. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible*** *al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos,* ***en formatos electrónicos disponibles en Internet*** *o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información* ***en un plazo no mayor a cinco días hábiles****.* ***La fuente deberá ser precisa y concreta y no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible****.*

1. Es así como, toda aquella información que sea requerida por los Particulares pero que, previamente se encuentre disponible en sitios electrónicos, como puede ser de manera enunciativa más no limitativa, **el sitio oficial del SUJETO OBLIGADO, el** **portal IPOMEX o las páginas institucionales,** los Sujetos Obligado pueden indicar la dirección electrónica donde obra la información solicitada, no obstante, **esta dirección electrónica debe ser precisa, de tal modo que no implique realizar una búsqueda en toda la información que ahí se encuentre. Además, debe ir acompañada del procedimiento a seguir, en caso de que la información se encuentre en distintos puntos del sitio electrónico referido.**
2. En este sentido, **la orientación** que realicen los Sujetos Obligados a los sitios electrónicos para la consulta de la información **debe cumplir con las características de tiempo y forma.**
3. Y, para que la orientación se encuentre en tiempo, debe realizarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles. En este caso, el **RECURRENTE** presentó su solicitud el ocho de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que, el plazo de cinco días hábiles para señalar los sitios electrónicos en donde obra la información transcurrió del **nueve al quince de febrero de dos mil veinticuatro**, con relación al calendario oficial emitido por el Instituto de Transparencia, Protección de Datos y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; en este caso, el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta el **veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro**, por lo que evidentemente no se encuentra en el plazo que señala la normatividad en materia.
4. Por otro lado, el **SUJETO OBLIGADO** **no refirió el procedimiento para acceder a la información precisa,** por lo tanto, no se cumple el requisito de forma establecido por la Ley en la materia. Por tal motivo, las razones y motivos de inconformidad vertidos por el **RECURRENTE** en el presente recurso de revisión resultan fundados.
5. En consecuencia, no es posible tener por atendido el requerimiento con la entrega de la liga electrónica, pues los enlaces no permiten acceder a la información solicitada; razón por la cual, será necesario que el **SUJETO OBLIGADO** realice la búsqueda de la información y entregue de ser procedente en versión pública.
6. Ahora bien, relativo a “la duración de los procesos y el rezago”, se reitera que la Servidora Pública Habilitada como Secretaria General del Pleno y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y Administración, informó que los sistemas que actualmente tiene el sujeto obligado no permiten localizar la información al grado de detalle requerido.
7. Al respecto, se tiene que el **SUJETO OBLIGADO** no cuenta con un documento donde se advierta la información solicitada, es decir, este no obra en sus expedientes **por no haberse generado, poseído y/o administrado.**
8. En este sentido, nos encontramos ante la presencia de un **hecho negativo**, en virtud de que la información solicitada no puede fácticamente obrar en los archivos del **SUJETO OBLIGADO**, ya que no puede probarse por ser lógica y materialmente imposible.
9. Asimismo, no se trata de un caso por el cual la negación del hecho implique la afirmación de este, simplemente se está ante una notoria y evidente inexistencia de la información solicitada. En este contexto, nos encontramos ante la presencia de un hecho negativo, en virtud de que la información solicitada no puede fácticamente obrar en los archivos del Sujeto Obligado, ya que no puede probarse por ser lógica y materialmente imposible.
10. Así, es dable sostener que, al haber existido un pronunciamiento por parte del **SUJETO OBLIGADO,** aún más del Servidor Público Habilitado correspondiente, este Instituto no está facultado para manifestarse sobre la veracidad de este, pues no existe precepto legal alguno en la Ley de la materia que lo faculte para que, vía recurso de revisión, pueda pronunciarse al respecto.
11. Así también, se insiste que el **SUJETO OBLIGADO** no está obligadas a generar documentos *“ad hoc”* para dar cumplimiento a los requerimientos planteados. Al respecto, el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios señala que la obligación de proporcionar información **no comprende** el procesamiento de esta:

***“Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados* ***sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos******y en el estado en que ésta se encuentre.*** *La obligación de proporcionar información* ***no comprende*** *el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o práctica investigaciones.”*

1. En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **01183/INFOEM/IP/RR/2024**; por ello, y con fundamento en la fracción III del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **REVOCA** la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** y **se ordena la entrega del documento donde conste el número de resoluciones confirmadas, modificadas o revocadas de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del 1 de enero de 2022 al 8 de febrero de 2024, de en versión pública de ser procedente.**

* **Punto 2 del cuadro descriptivo.**

1. Ahora bien, en el punto **2** del cuadro descriptivo, relativo a la solicitud de información **00056/TRIJAEM/IP/2024,** se reitera que el **RECURRENTE** solicitó la copia del Libro de Gobierno de Juicios Administrativos, de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, únicamente las páginas anotadas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 8 de enero de 2024; en respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** por medio del Servidor Público Habilitado de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, refirió que el Libro de Gobierno de Juicios Administrativos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria contiene información referente a asuntos de diversas índoles, por lo cual, **la persona solicitante** **podría consultar los expedientes en que se documenta el procedimiento y proceso administrativo,** así como, obtener copia certificada de los documentos y actuaciones que los integren, **previo a la acreditación de su personalidad jurídica.**
2. En atención a lo anterior, se colige que el **SUJETO OBLIGADO** no niega la competencia para conocer de la información solicitada, por el contrario, con la respuesta pronunciada asevera que es competente para conocer de la solicitud de información*,* lo anterior es así, ya que el estudio enunciado tiene por objeto determinar si los Sujetos Obligados generan, poseen o administran la información solicitada, sin embargo, en aquellos casos en que estos han asumido la competencia, sería ocioso y a nada práctico nos conduciría su estudio, ya que, se insiste, el ente obligado asumió la competencia referida.
3. Por consiguiente, se procede al análisis del requerimiento planteado por persona solicitante y la respuesta proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO**, a efecto de determinar si el derecho de acceso se satisfizo con las mismas, o en su defecto, señalar los documentos que en el ejercicio de sus atribuciones pudo haber generado, y que, de manera enunciativa más no limitativa, pudieran colmar dicho derecho.
4. En consecuencia, resulta conveniente referir lo previsto en el artículo 6, Apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual deberá garantizarse ordenando la entrega de tales documentales, siempre y cuando éstas sean de acceso público.
5. Sirve de sustento a lo anterior, el Criterio 028-10 emitido por el Pleno del entonces llamado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que establece que se deberá garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como **cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad** de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboraciónaunque el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación, el **SUJETO OBLIGADO** deberá hacer entrega del mismo al solicitante, como a continuación se cita:

***“Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el documento en específico.*** *La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante.”*

1. Así las cosas, este órgano colegiado en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de los principios rectores de la función garante en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y VI, del artículo 9, del mismo ordenamiento legal, se conmina a este Organismo Garante a apegarse a los principios de imparcialidad y legalidad, el primero de ellos consistente en una cualidad de ésta Autoridad para que sus actuaciones sean ajenas o extrañas a los intereses de las partes en la controversia resolviendo sin favorecer a ninguna de ellas y el segundo de ellos la obligación de ajustar su actuación fundando y motivando las resoluciones y actos en las normas aplicables.
2. Ahora bien, para entender los alcances de la información pública se considera importante citar el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***“CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3, 4,11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

1. El derecho de acceso a la información encuentra su materia elemental en los documentos, y la Ley de Transparencia local nos brinda el siguiente concepto, para darnos un mejor panorama:

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

1. Es así como, todos los actos de autoridad que realicen los sujetos obligados deben estar documentados y, bajo el más alto estándar de transparencia deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, a disposición de los particulares que la soliciten.
2. Resulta necesario referir que, el artículo 6° apartado A fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, guardan una estrecha relación, puesto que los ordenamientos citados concurren refiriendo que **los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones,** considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen, posean o administren.
3. Además, debemos tomar en cuenta los artículos 4 y 12 (antes transcrito), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen lo siguiente:

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

1. Es así que, por un lado se tiene la obligación de documentar todos los actos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, mientras que por otro, se ven impuestos por la obligación de hacer pública toda aquella información que se encuentre en su posesión en estricto apego a los principios de eficacia[[5]](#footnote-5) y máxima publicidad, sobre éste último se debe poner mayor énfasis, puesto que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, lo que permite que la ciudadanía tenga un amplio acceso sobre lo que es el actuar de las autoridades.
2. Robustece lo anterior la Tesis aislada identificada con la clave I.4º.A.40 A del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro XVIII, Marzo 2013, Página 1899.

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.*** *Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.”*

1. Como se ha señalado, los Sujetos Obligados deberán proporcionar toda la información que se encuentre en su posesión bajo los estándares más altos de transparencia y máxima publicidad.
2. En mérito de lo expuesto, resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **01233/INFOEM/IP/RR/2024**; por ello, y con fundamento en la fracción III del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **REVOCA** la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** y **se ordena, en versión pública, copia de las páginas anotadas en el Libro de Gobierno de Juicios Administrativos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, del 1 de enero de 2022 al 8 de enero de 2024.**

* **Nombre de actores en juicios administrativos**

1. En atención a lo anterior, es importante referir que en el **Libro de Gobierno de Juicios Administrativos** pudieran obrar datos personales susceptibles de ser protegidos como confidenciales, como lo es, **el nombre de la persona** que demandó al Sujeto Obligado (demandado) y que dicha demanda dio inicio a un procedimiento del cual no obtuvo algún beneficio, debe ser motivo de protección, ello en atención a que este Órgano Garante debe ofrecer la mayor protección de una persona que al demandar ejercita su derecho a reclamar ante un órgano el cumplimiento de sus derechos, por lo que, dar a conocer su nombre puede hacerlo identificable.
2. Al respecto, se considera que el nombre se integra con el sustantivo propio y el primer apellido de los padres, en el orden que, de común acuerdo determinen; asimismo es la manifestación principal del derecho subjetivo a la personalidad y atributo de esta en términos del artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, de tal suerte, el nombre per se es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que, se considera un dato personal.
3. Así, **se desprende que la información que dé cuenta respecto a que una persona es actor,** de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional, corresponde a un dato personal que afecta su esfera privada. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
4. Además, es oportuno traer el estudio la Tesis: I.9o.C.27 K, Novena Época, con número de registro 182261, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la cual se dispone que a diferencia de los actos administrativos que son dictados en forma unilateral por la autoridad y no siempre se tramitan mediante un procedimiento, los actos en el ámbito jurisdiccional la autoridad es sólo mediadora en la controversia suscitada entre los particulares, y el procedimiento se lleva a cabo a través de una serie de actos concatenados que son provocados por las propias partes en el proceso, tal como se muestra a continuación:

***“ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES. SUS DIFERENCIAS.*** *En materia administrativa los actos son dictados en forma unilateral por la autoridad y no siempre se tramitan mediante un procedimiento; por tanto, no existe una verdadera controversia entre la autoridad y un particular. En algunos casos, la autoridad administrativa da inicio al procedimiento a través de una orden dirigida al particular, quien debe acatarla o combatirla a través del juicio de nulidad o del recurso que prevea la ley que rige a ese acto. En cambio, en el ámbito jurisdiccional la autoridad es sólo mediadora en la controversia suscitada entre los particulares, y el procedimiento se lleva a cabo a través de una serie de actos concatenados que son provocados por las propias partes en el proceso, es decir, un procedimiento jurisdiccional inicia con la presentación de la demanda y culmina con la sentencia definitiva, y se forma con una serie de etapas que prevé la ley adjetiva y que sujeta a los particulares; es decir, la presentación de la demanda trae como consecuencia que se lleve a cabo el emplazamiento de la contraparte; el ofrecimiento de pruebas trae como consecuencia su admisión y desahogo; sin embargo, puede suceder que una vez presentada la demanda no se lleve a cabo el emplazamiento, en virtud de que el actor desista de la acción o de la instancia; asimismo, el ofrecimiento de pruebas no implica necesariamente su admisión y desahogo, porque las partes podrían desistir del ofrecimiento o no realizar los actos necesarios para su desahogo.*

1. Sobre el tema, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
2. De igual manera, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 11, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
3. Finalmente, el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación; y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
4. Abona a lo anterior, lo previsto en la tesis aislada número 1a. CCXIV/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, de diciembre de 2009, página 277, de la Novena Época, materia constitucional, que establece lo siguiente:

***“DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA.*** *La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo ‘privado’. Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural. Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad- . A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.”*

1. De conformidad con lo señalado, se colige que las actividades que realicen los particulares, dentro del ámbito privado, o dentro de la esfera particular, es información que debe protegerse.
2. Además, proporcionar la información requerida, relacionada con el nombre de las personas, se estaría vinculando una situación jurídica de las personas identificadas en el requerimiento como participantes de un juicio de cualquier naturaleza, así como, el estado procesal del mismo.
3. En ese contexto, se trae a colación la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, de mayo de 2008, página 229, de la Novena Época, materia constitucional, misma que a la letra señala:

***“DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.*** *Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.”*

1. Conforme a dicha tesis aislada, la garantía de seguridad jurídica de los individuos a no ser molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, y cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Así, dar a conocer el nombre de la parte actora en algún juicio, constituye información confidencial que afecta su esfera privada, dado que vulneraría la protección de su intimidad, al tratarse de información que da cuenta de situaciones concretas en ejercicio de sus derechos que hacen evidente la posición jurídica en la cual se han colocado por decisión propia.
3. En ese contexto, en el artículo 24, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relacionado con el 24, fracción XIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se señala que los sujetos obligados serán los responsables de proteger, resguardar y asegurar los datos personales en su posesión.

**QUINTO. VERSIÓN PÚBLICA.**

1. **Nociones generales.**
2. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitada**,** eventualmente pudiera obrar datos personales susceptibles de protegerse, el **Sujeto Obligado** deberá de hacer la adecuada versión pública, protegiendo los datos que no son susceptibles de ser proporcionados.
3. No pasa desapercibido para este Órgano Garante que los Sujetos Obligadosserán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.  Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).  Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.  El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El **Sujeto Obligado** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación. | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial. | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. Si el Servidor Público incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales incumple con lo que estipula las disposiciones legales establecidas, asimismo, si entrega un documento testado sin el debido acuerdo de clasificación.
2. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

## **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **01183/INFOEM/IP/RR/2024 y 01233/INFOEM/IP/RR/2024,** en términos del **Considerando** **CUARTO y QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICAN** las respuestas emitidas a las solicitudes de información **00061/TRIJAEM/IP/2024 y 00056/TRIJAEM/IP/2024,** y se **ORDENA** al **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México,** entregar vía Sistema de Accesos a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, en versión pública, el o los documentos donde conste lo siguiente:

1. **El número de resoluciones confirmadas, modificadas o revocadas de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del 1 de enero de 2022 al 8 de febrero de 2024; y**
2. **Páginas del Libro de Gobierno de Juicios Administrativos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, del 1 de enero de 2022 al 8 de enero de 2024.**

Para efectos de lo anterior, se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición del **RECURRENTE.**

**TERCERO. Notifíquese vía SAIMEX l**a presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO. Notifíquese al RECURRENTE** la presente resolución vía **SAIMEX.**

**QUINTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnar vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

**SEXTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE (11) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 9. …

   II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

   … [↑](#footnote-ref-5)